

La Universidad de Granada se planta ante los impagos de la Junta

► La deuda de 150 millones de euros se traduce en un plazo medio de pago a proveedores de 140 días, muy por encima del resto de universidades

DIEGO MÁRQUEZ
GRANADA

La Universidad de Granada está viviendo una situación económica que puede llegar a «colapsar» si la Junta de Andalucía no acelera el saldo de la deuda de 150 millones de euros que mantiene con la institución académica. Preocupa sobremanera el plazo de pago a proveedores que la rectora de la Universidad de Granada (UGR), Pilar Aranda, cifró ayer en unos 140 días de media con alguna factura pendiente aún de diciembre de 2014.

Mientras tanto «hay universidades que están pagando en 30 días» y «tienen dinero ahorrado en el banco», resaltó Aranda que se remitió a datos reconocidos por la Junta de Andalucía en los que se puede ver que la segunda universidad de la comunidad autónoma en el pago a proveedores es el Pablo de Olavide, en Sevilla, que no llega a los 80 días.

El dato del retraso de más de 90 días en el pago a las farmacias catalanas que generó un escándalo nacional sirve para dar una dimensión de la situación a la que está llevando la Junta de Andalucía a las universidades andaluzas y, por tanto, a las empresas que trabajan con ellas, muchas pymes. El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, cifró entre 500 y 600 millones la deuda el pasado noviembre, y dijo que esperaba acabar con el grueso de la misma en dos años.

En el caso de la UGR, desde entonces se ha producido un pago que se sumó a otro el pasado verano para disminuir el débito. Pero la cifra de 150 millones de euros sigue asfixiándola en una economía además como la granadina en la que la Universidad es un motor económico de primer nivel.

Los pagos improrrogables a proveedores, unidos a los fondos Feder para la investigación que habría que devolver si no llega financiación del Gobierno de Susana Díaz antes de fin de año, han hecho saltar todas las alarmas en la institución académica granadina donde cada órgano de decisión es un rosario de lamentos de profesores y científicos por el calvario económico por el que están pasando.

Ello llevó ayer al Consejo Social de la UGR a tomar las riendas para mostrar una «posición dura» ante la Con-

sejería de Economía a la que se remitirá una carta abogando por el cambio del modelo de financiación de las universidades andaluzas. Se exigirá que se tengan en cuenta datos cualitativos como los ranking científicos sobre los cuantitativos, de número de alumnos, que han primado hasta ahora.

Así lo explicó el presidente del Consejo Social, Gregorio Jiménez, que manifestó además que, de los 382,6 millones de euros a los que se eleva el presupuesto de la UGR para 2016, solo entre 310 y 315 se salvan de la incertidumbre «que no es razonable que exista» y que viene derivada de la política de pagos de la Junta.

La UGR «ha sido discriminada en años anteriores», ha reseñado Jiménez. Cuenta además con el hándicap de la «deuda derivada del coste de la (nueva) facultad de Medicina que han sido 78 millones» financiados con recursos propios, explicó Aranda durante la presentación del presu-

puesto universitario granadino para 2016 junto con su gerente, María del Mar Holgado, quien hizo hincapié en la «disminución gradual de la financiación de la Junta».

Situación crítica

En el equipo de la rectora confían en que, dada esta crítica situación, Granada reciba alrededor de un 40 por ciento de los 100 millones que hace unos días comprometió Ramírez de Arellano para las universidades andaluzas antes de finales de año. De ellos, 17 millones son ineludibles para mantener a flote la centenaria institución académica.



El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, en el Parlamento

La Junta prometió 100 millones a final de año para «eliminar dificultades»

A pesar de la deuda que arrastran las instituciones académicas en Andalucía, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, subrayó el pasado viernes que la situación de la tesorería de las universidades públicas andaluzas es una «prioridad». Por ello prometió que este mes abonará otros cien millones para reducir la deuda y atender el pago a

proveedores. Ramírez de Arellano, exrector de la Universidad de Sevilla, hizo estas consideraciones durante un acto en Granada y después de que miembros del claustro de la Universidad granadina demandaran en una sesión ordinaria mayor contundencia con la Junta para que abone la deuda con el centro. El consejero reiteró que la Junta atiende como prioridad la

situación de tesorería de las universidades y explicó que desde que llegó al Gobierno andaluz, se han destinado 140 millones de euros para reducir la deuda, a los que se sumarán otros 100 antes de que acabe el año para «eliminar dificultades». Argumentó que la Junta se concentra en abonar las deudas con proveedores de las universidades, para que «los más débiles cobren» y se comprometió a que en el nuevo montante económico, la Universidad de Granada sale «priorizada».

mica granadina. La crisis de la UGR está llevando a que no se haya efectuado aún la devolución de la paga extraordinaria de 2012 a sus trabajadores y situaciones como el cierre de centros en agosto, Navidad y Semana Santa que vuelve a prorrogarse un año más.

El mantenimiento del personal y la apuesta por la investigación son los factores que han querido primar desde la Universidad de Granada para sus cuentas de 2016 en las que caen en un 20 por ciento las inversiones reales.

El porcentaje de participación de la UGR en el modelo de financiación del sistema universitario andaluz es del 21,2 por ciento. Conforme a ello, la financiación operativa estimada para el año próximo es de 241,6 millones de euros. Conforme a la cláusula de salvaguarda que los rectores pactaron para tener al menos la misma financiación que el año anterior, la Universidad ha estimado sus ingresos con cargo al sistema andaluz en 242,4 millones.



Griñán, con los diez rectores de las universidades, en la firma del acuerdo en junio de 2013

RAÚL DOBLADO

Una carta
 El Consejo Social de la UGR aprobó remitir a la Junta una carta «dura» para reclamar la deuda

Cambio de modelo
 La institución pide que en el reparto de fondos se tengan en cuenta datos cualitativos y no solo número de alumnos

Temor
 Los gestores temen que la mitad del presupuesto anual esté rodeado de incertidumbre

J. M. SERRANO

Dos años y medio después de acordar con los rectores liquidar la deuda, los impagos siguen con cifras millonarias

El papel mojado del pacto con los rectores

A. R. VEGA
 SEVILLA

Para el Gobierno andaluz, el Acuerdo con el Sistema Universitario por Andalucía no era un pacto cualquiera. Para envolverlo de solemnidad se escogió el salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, escenario reservado a actos solemnes como la toma de posesión de los consejeros. Allí, flanqueado por los rectores de las diez universidades públicas andaluzas, el 19 de

junio de 2013, tres meses antes de presentar su dimisión, el entonces presidente, José Antonio Griñán, compareció ante una nube de fotógrafos y periodistas para firmar un pacto con las universidades que garantizaba los pagos de la deuda reconocida con éstas. Lo enmarcó dentro del octavo acuerdo del gran Pacto por Andalucía que viene desarrollando el Ejecutivo andaluz. Entre los rectores que posaron para la foto estaban los de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, y de Málaga, Adelaida de la Calle,

que desde junio se sientan en el Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz. El primer pago iba destinado a abonar las facturas a proveedores, que representaban el 10% de la deuda total de las universidades. Por entonces la deuda total alcanzaba los 900 millones de euros.

Dos años y medio después de aquel solemne acuerdo, la principal promesa recogida en el documento, de diez páginas, ha quedado en papel mojado. La deuda contraída por las inversiones en infraestructuras realizadas en la época de bonanza sigue pesando como una losa en las cuentas de las universidades. Ramírez de Arellano estimó hace pocos meses que debe entre 500 y 600 millones. Entre otras razones porque el documento no se especificaba ningún calendario de pago. Más allá de los números, el acuerdo sirvió para hacer confrontación contra el Gobierno central en plena oleada de recortes. Los rectores hicieron frente común con la Junta contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien planteó que las calificaciones sean tenidas en cuenta a la hora de conceder las becas.